UNIVERSIDAD CENTRAL DE SANTO DOMINGO.

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS.

¿La facultad de aceptar o repudiar un legado, está comprendida en el dominio del artículo 1166 del Código Civil?

AÑO ACADEMICO DE 1917 A 1918.

TESIS

NUMERO 3.

PARA LA LICENCIATURA

EN

DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS,

SUSTENTADA POR

HECTOR L. GALVAN

MAESTRO NORMAL

JURADO EXAMINADOR:

Presidente Prof. Jacinto B. Peynado.
Vocales { Prof. Horacio V. Vicioso.
Vocales { Prof. Natalio Redondo.

IMP. BENITO A. MONTALVO & H.NO.
SANTO DOMINGO.
1917.

Para mi ilustrado y buen amigo
el Lcdo don D. Rodriguez
El autor.

Personal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

de la Universidad Central de Santo Domingo.

Profesor—Apolinar Tejera (Decano y Miembro H. del Senado)
,, Federico Henríquez y C. (Vice Rector)
,, Angel M. Soler (Delegado Académico)
,, Horacio V. Vicioso " "
,, Moises García Mella
,, Jacinto B. Peynado
,, Manuel A. Machado
,, Natalio Redondo
,, Eduardo V. Vicioso

Las opiniones emitidas en las disertaciones corren por cuenta de los autores y al califiicar la labor, la Facultad o Escuela no entiende que le imparte aprobación o improbación al fondo de las conclusiones. (Disposición del Art. 777).

BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA REPÚBLICA DOMINICANA

BIBLIOTECA NACIONAL
SANTO DOMINGO, R. D.

2024-0239

A mis padres.

A mis hermanos,
con deseos de estímulos.

BIBLIOTECA NACIONAL
PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA
REPÚBLICA DOMINICANA

A Don Ramón Lavandier,
con el afecto de un hijo.

A la memoria de mi tio,
Don Manuel de Jesús Galván.

BIBLIOTECA NACIONAL
PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA

A mis deudos,

Lcdos. Rafael E. Galván, Manuel D. Galván, Joaquín Peguero y R. O. Galván.

A los profesores,

Dr. Jacinto B. Peynado, padrino de tesis y Drs. Horacio V. Vicioso y Natalio Redondo.

A los Lcdos.

Jacinto R. de Castro, Alberto Arredondo Miura, Domingo Rodríguez M., Arístides García Mella y Dr. Salvador B. Gautier.

A mis viejos profesores,

Lcdos. Pelegrín L. Castillo, Augusto Jupiter, Nicolás H. Pichardo y Drs. Gustavo A. Mejía y Parmenio Troncoso.

A mis compañeros,

los profesores de la Escuela Normal Teórica de Santo Domingo.

A mis compañeros de estudio,

Lcdos. Temístocles Messina, Milcíades Duluc, P. Rodríguez Volta, Br. Miguel A. Delgado, M. N. Antonio E. Alfau, M. N. Pedro P. Peguero, Br. Luis C. del Castillo y M. N. Jaime Vidal V.

BNPHU
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA REPÚBLICA DOMINICANA

A los Catedráticos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Drs. Apolinar Tejera, Angel M. Soler, Manuel A Machado, Federico Henríquez y C., Eduardo V. Vicioso, Moises García Mella y Manuel de J. Troncoso de la C.

BNPHU
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA

Señores Profesores:

Concurrimos por la postrera vez ante vosotros, en la más delicada de las pruebas, alentados por la induljencia con que acogisteis nuestros esfuerzos anteriores. A la verdad que si fuisteis benévolos cuando teniais derecho a exigir más, por tratarse entonces del mero aprendizaje de un número limitado de principios; hoy, por lo contrario, que nos ocupamos en una labor más ardua, en la exposición de ideas propias sobre un punto demasiado teórico y concreto, requerimos insistentemente vuestra discretísima induljencia.

Sentado esto, seguiremos adelante en el desenvolvimiento de la tesis, que vosotros mismos me recomendasteis, así intitulada: «¿La facultad de aceptar o repudiar un legado, está comprendida en el dominio del artículo 1166 del Código Civil?»

BNPHU
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA

El ideal más encumbrado del legislador es la armonía social, la concordia de los asociados. Para el logro de tan nobilísimo propósito establece y fija la igualdad de condiciones jurídicas, una de las más bellas y generosas conquistas de la sociedad moderna.

Desde el punto de vista jurídico la relación normal entre los hombres es una relación de independencia: la infinita variedad de obligaciones que pueden originarse de la venta, el préstamo, el mandato, una constitución de hipoteca etc. etc., constituyen indiscutiblemente alteraciones del estado natural, inversiones del orden jurídico, que, según se sabe, es distinto del orden sociológico, ya que precisamente este último se caracteriza por la interdependencia de los individuos que integran el conglomerado social, pues con esa interdependencia cumplen mejor los fines de su vida.

La igualdad no ha sido nunca una realidad histó-

mercio: el crédito de un comerciante, esto es, la fe que inspira, es correlativa del estado en que se encuentran los bienes que posee.

Este derecho se basa en la idea de prenda tácita concedida a los acreedores, distinta de la concebida por los romanos y de la cual se origina, aunque si bien visiblemente modificada por el derecho francés.

El pueblo francés, con su profunda convicción democrática originó una corriente de igualdad, hasta el punto de que en uno de los períodos de su historia, prevaleció el colectivismo con notable tendencia al comunismo: la comunidad en los bienes para los miembros de una misma familia, al menos, hizo imposible la persecución de estos por su acreedor; para disfrutar de semejante beneficio, era menester una constitución de prenda expresa con la anuencia del *pater familias*.

«La influencia de la copropiedad de la familia, así lo exige, dice Huc, ¿cómo podría un acreedor perseguir el pago sobre los bienes de que no era propietario exclusivo su deudor? No podría obrar sobre estos sino a condición de haber obtenido un derecho de prenda general, para lo cual era indispensable el consentimiento expreso o tácito de todos los miembros de la familia».

Esto es, desde luego, contemporáneo con aquel estado social en que empiezan a equilibrarse las tendencias unipersonales del individuo con los reclamos

rica; no existió en el estado de barbarie de las sociedades primitivas, no existió tampoco en Oriente, ni en Grecia, ni en Roma, ni en la noche larguísima de la Edad Media, y aún en el día una gran parte de los hombres está subordinada a la otra parte. Subordinados están los pobres de espíritu a los audaces, los débiles a los poderosos, el deudor al acreedor.

Y esa subordinación sólo acabará con la muerte del planeta; pero con el propósito de que haya en el mundo la menor dependencia posible el legislador ha dictado principios como el contenido en el artículo 1166 del Código Civil, artículo que, aunque en apariencia tiende a beneficiar exclusivamente al acreedor beneficia también al deudor, ya que obliga a este último a deshacerse de la pesada carga de sus compromisos con el acreedor.

El artículo 1166 es un corolario anticipado del principio contenido en el artículo 2093 que reza de esta suerte: «Los bienes del deudor son la prenda común de sus acreedores», pues claro está que si el acreedor se avino a dar o hacer algo en cambio de lo que más tarde recibiría de su deudor, se determinó a ello en la confianza de que sus derechos de acreedor tenían segura garantía en los bienes del deudor, para el caso problemático de verse en la forzosa de ampararse en el artículo 1166 del Código Civil.

Pruebas evidentísimas de lo dicho anteriormente se hallan a porrillo en las operaciones diarias del co-

Veamos cual es el carácter de esta prenda general que tienen los acreedores sobre los bienes de su deudor. ¿Es este uno de esos principios que no podrían derogar las convenciones particulares de las partes, tales como la fianza del tutor, etc.? ¿Interesa al orden público el cumplimiento del artículo citatado? A estos puntos responde el Profesor Nassard con su acostumbrado buen juicio: «De acuerdo con los nuevos principios del derecho una prenda general y tácita está necesariamente unida al crédito: y esto es tan lógico y natural que no se podría concebir un crédito sin su correspondiente prenda general, pues lo contrario equivaldría a convenir en ser acreedor sin vislumbrar esperanzas de pago».

Elementos de la prenda.—Examinemos ahora que clase de bienes entran en la esfera de acción de los acreedores, y esto desde el punto de vista teórico de la clasificación de los derechos; y reservemos un ca-

del Estado, o mejor dicho, en aquel período de transición en que aparece el individuo conforme con los lazos que le atan al grupo general en cuyo obsequio abdica la mayor parte de sus atributos de ser omnipotente.

Una prueba palpable de que en la organización se tocan a veces los extremos: la sociedad necesitaba sojuzgar al individuo, y del estado de rebeldía en las sociedades primitivas le fuerza a soportar el pupilaje en la organización semibárbara de la familia, en que perdió el derecho de propiedad entre otros muchos.

La necesidad en que estaba el acreedor de garantizar su préstamo hizo que en el correr del tiempo, la constitución de prenda fuese una práctica ordinaria. Hoy no se exige, pues se presume que el deudor ha dado la prenda de sus bienes a su acreedor.

Tal es la idea expresada en el artículo 1166 del Código Civil, que es, según hemos dicho anteriormente, una aplicación anticipada del artículo 2093.

tenga por fundamento un «acto de simple voluntad o que sea la consecuencia de una opción de parte del deudor».

Por su parte Huc, pone especial cuidado en distinguir las llamadas simples facultades, las cuales no pueden ejercer los acredores aptos para acojerse al artículo 1166 del Código Civil.

Sin embargo de habernos detenido a disertar acerca de los derechos que pueden ser ejercidos por los acreedores, nos apresuramos a advertir que no confundimos, según acontece de ordinario, el objeto de la acción, que es el derecho, con el objeto del derecho que es la cosa misma que sirve de base a este derecho. *Primus* es acreedor de *Secundus* y *Secundus* ha retrovendido a *Tertius* su casa por un valor inferior a su verdadero precio. *Primus*, al ejercer la acción oblicua tiene por objeto el derecho de *Secundus* a rescindir la venta; y al ejercer este derecho tiene por objeto hacer entrar la casa en el patrimonio de *Secundus*.

Condiciones para el ejercicio de la acción de los acreedores.—Las condiciones indispensables para que el acreedor pueda ejercer la acción de su deudor están indicadas por el alcance mismo de esta acción y por el carácter del derecho que le sirve de base, todo ello desde el punto de vista de la clasificación de las acciones en conservatorias y ejecutorias.

El fin perseguido por el artículo 1166 consiste en

pítulo para tratar de modo más detenido los diversos casos de derecho y acciones que pueden sufrir la aplicación del artículo 1166.

La relación de ideas que existe entre los artículos 1166 y 2093 del Código Civil dominicano, pues según sabemos el primero no es más que un corolario anticipado del segundo, y la circunstancia de referirse el 1166 al patrimonio indica claramente que comprende los bienes incluidos en este, esto es, los bienes muebles e inmuebles.

Ahora bien, comparando los términos del artículo 1166 con los del 724 del mismo Código Civil, podremos advertir la desigual estima con que el legislador trata a los acreedores y a los herederos. Con efecto, la trasmisibilidad que consagra este último artículo en favor de los herederos comprende derechos que no podrían reputarse muebles ni inmuebles, y que por estar fuera de la prenda están *ipso facto* fuera del alcance de los acreedores. I esto, según el criterio de la Jurisprudencia (París 13 de agosto de 1886, 30 de mayo de 1862) y de la mayoría de los autores; ya que si fuésemos a seguir los sistemas de unos pocos autores complacientes en demasía con el deudor como Huc y Laurent, se encontrarían reducidos a un corto número los casos que podrían aprovechar los acreedores para ejercer la acción de su deudor.

Laurent, por ejemplo, no se aviene a que el acreedor ejerza el derecho del deudor cuando dicho derecho

hasta el exceso, y entre los cuales figura el de Mr Labbé, quien, por una desmedida fidelidad histórica, decide que es presiso, además, un título ejecutorio. Pero este criterio no es más que una consecuencia de los principios de Mr. Labbé, quien sostiene que la acción que conlleva el artículo 1166 del Código Civil, es un verdadero embargo retentivo.

Serían igualmente innecesarias la cesión y la subrogación, salvo el caso en que el derecho perteneciera a varios, como ocurre en la quiebra; en este caso no se podría ejercer sino por el representante común, esto es, por el Síndico. (Casación 23 de julio de 1889. D. 88, 2, 292.)

Se ha discutido grandemente sobre la calidad de los acreedores al ejercer la acción oblicua; más de 6 sistemas se disputan el honor de ser el verdadero, entre ellos, el de Mr. Labbé que se inspira extrictamente en la tradición del derecho romano en la materia. Nos limitaremos a enunciar algunos de los múltiples sistemas disidentes de la opinión tenaz de la Jurisprudencia de la Corte de Casación para luego esbozar esta.

Por una parte están los sistemas de Laurent y Colmet de Santerre, quienes consideran al acreedor actuando en nombre y representación de su deudor. Siguen los principios del antiguo derecho francés el cual considera la prenda general como una conceción expresa hecha al acredor investido del carác-

traer al patrimonio uno de los elementos de la prenda general, y esto por medio de una acción que los pone al alcance de sus acreedores y en condiciones de ser expropiados por estos. Con efecto, el artículo 1166 es el preliminar necesario, en ciertos casos, de una vía de expropiación forzosa, el embargo retentivo, del que debe distinguirse siempre. De manera que el artículo 1166 encierra algo más que un acto conservatorio y desautoriza a un acreedor a término o bajo condición a realizar la acción que el comprende.

No obstante, la acción intentada en virtud de un juicio, será aceptable, a pesar del recurso de apelación interpuesto, siempre que la parte condenada haya reconocido la deuda o se limite a contradecir su montante.

«Es igualmente necesario, dice el Profesor Planiol que el deudor se abstenga de obrar por si mismo; si ha hecho valer anteriormente sus derechos ante la Justicia, sus acreedores podrán supervigilarle interviniendo en la instancia; pero se les debe negar el derecho de formar una nueva demanda a no ser en la forma prescrita por el artículo 1167 del Código Civil.»— Hay Jurisprudencia contraria a este criterio—

Pero el hecho de que el acreedor no pueda obrar sino en virtud de un crédito exigible, y por el descuido del deudor perjudicial para sus acreedores no debe alentar los sistemas indulgentes con aquel

Hemos sostenido varias veces que el Art. 1166 del Código Civil dominicano conlleva una aplicación del 2093 del mismo Código y que el derecho que tienen los acreedores de ejercer la acción de su deudor se coligede la constitución de prenda general conferida por el segundo de dichos artículos. De suerte que si quisiésemos precisar los casos que pueden sufrir la aplicación del artículo 1166 del Código Civil dominicano sería menester acojer el criterio según el cual los derechos se dividen en patrimoniales y no patrimoniales.

En la parte final de este artículo, nos advierte el legislador que existe una clase de derechos a la cual no puede aplicarse el principio establecido en la primera parte del precitado artículo. Sin embargo, la fórmula de que se sirve el legislador para expresar la excepción determina vagamente su verdadera intención. Conforme con la mayoría de los autores nos inclina-

ter de mandatario, para el caso de alguna eventual persecución.

Este sistema está resumido en un pasage tristemente célebre del notable jurisconsulto de Avignon: «El acreedor no ejerce un derecho propio sino que hace valer el del deudor; obra pues en nombre y representación de este de la misma manera que un mandatario lo haría con su mandante».

El sistema radicalmente opuesto al anterior es el de Mr. Labbé, que excluye toda idea de mandato, y considera a los acreedores obrando en su propio nombre.

Existe un sistema ecléctico sustentado por Demolombe, Prudhon y Aubry y Rau, que presenta a los acreedores obrando a la vez en su propio nombre y en el de sus deudores. Obran en su nombre por cuanto actúan en su propio interés y en nombre del deudor por aquello de que al ejercer los derechos de este es preciso que sea por él y en su representación.

BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA REPÚBLICA DOMINICANA

to Huc: «No están comprendidas en la aplicación del artículo 1166 del Código Civil las esperanzas de hacer fortuna que resulten de las aptitudes diversas del deudor, de su situación personal, de las circunstancias en una palabra, que podríamos llamar su crédito real.»

mos a creer que la intención del legislador no fué referirse a las acciones que garantizan el estado de las personas y contribuyen a mantener las relaciones de familia; sinó a un número limitado de derechos patrimoniales que por llevar asociado un poderoso interés moral sería contraproducente abandonar a merced de los acreedores.

El artículo 1166 establece una excepción para las acciones exclusivamente peculiares de la persona, pero la establece mediante una fórmula que no indica el modo de distinguir las acciones peculiares al individuo—no sugetas a la aplicación del artículo 1166—de las no peculiares al individuo sugetas a la aplicación del artículo. «Las acciones cuyo ejercicio es preciso negarle al acreedor, dice el Profesor Marcel Planiol, son las extra-patrimoniales y algunas comprendidas dentro del patrimonio».

No es necesario explicar las razones por las cuales las acciones extra-patrimoniales no están incluidas en la esfera de acción de los acreedores; estos no han podido contar con derechos que por su índole moral se resisten al cálculo y al lucro y entre los cuales son de notar especialmente la acción en denegación de hijo adulterino, en nulidad de matrimonio, en divorcio, en reclamación y contestación de filiación y otros derechos que derivan de aptitudes personales constitutivas del mérito de un individuo.

Refiriéndose a las últimas dice el profesor Hipóli-

Estudiemos los casos más controvertidos en doctrina:

El derecho del padre o de la madre superviviente sobre los bienes de los hijos muertos, constituye en el estado actual de la ciencia del derecho uno de los tópicos sobre los cuales se han emitido muy varias y encontradas opiniones. Algunos tratadistas opinan que es un verdadero usufructo sugeto, por lo tanto, a la aplicación del artículo 1166 del Código Civil; pero al emitir tal opinión echan en olvido que la acción de este artículo es un preliminar, en ciertos casos, del embargo, aunque distinto del embargo mismo.

Nosotros pensamos que el usufructo del padre o de la madre sobre los bienes de sus hijos constituye un atributo de la patria potestad y por lo mismo, está basado en una consideración de orden moral que le hace inasequible para los acreedores del padre usufructuario. I a la verdad, sería de un efecto

tribunal rechazó las pretensiones del acreedor demandante fundándose en que esta era una *acción absolutamente peculiar a la persona.*

La doctrina acoje unánimemente la resolución adoptada por la Corte, si bien la basa en consideraciones de otro orden. Así pués, no solo rechaza el fundamento racional de la expresada decisión, sino también los argumentos aportados por M. Labbé con objeto de justificar este veredicto.

«En nuestra legislación, dice este notabilísimo profesor, los bienes presentes del deudor y los que pueda allegar en lo futuro, constituyen una garantía para sus acreedores, estando estos autorizados a tomar en consideración, además, las esperanzas de prosperidad, sus facultades vocacionales e industriales. Si aconteciere que un tercero arrebatase al deudor una fuente de recursos, tendrían los acreedores el derecho de ser resarcidos por el daño causado a su deudor, tanto en lo moral como en lo físico».

En cambio, pueden los acreedores ejercer la acción en daños y perjuicios por delitos contra el patrimonio; la acción en nulidad, rescisión por causa de violencia, error o dolo; la acción en cobro de indemnización contra una compañía de seguro, la acción en nulidad por causa de minoridad o interdicción, por causa de dotalidad del fondo enagenado; por causa de autorización marital, etc. (Planiol, B. Lacantinerie, Demante).

lamentable para los hijos, el despojo en la persona de su padre de una prerrogativa natural.

El hecho de que no puedan embargar el usufructo totalmente no implica incapacidad para apoderarse de los bienes que pertenezcan al padre en virtud de este usufructo.

«Los acreedores del padre, dice el Profesor Huc, podrían realizar un embargo retentivo sobre los intereses de los créditos que constituyan el usufructo».

Según la opinión constante en la Jurisprudencia y la Doctrina el acreedor no tiene derecho de sustituir al deudor en la administración de su patrimonio. Este último tiene el libre ejercicio de sus bienes salvo los casos de urgencia, tales como la realización de un hecho que paraliza la prescripción, la inscripción de una hipoteca etc., etc.

En virtud del principio ya expresado, no se consiente al acreedor ejercer la acción correspondiente a su deudor locatario, acordada a este por el artículo 1722 del Código Civil dominicano.

¿Qué decidir de la acción en daños y perjuicios resultante del perjuicio causado en la persona física del deudor? *Primus* fué herido por *Tertius*; podría *Secundus* acreedor de *Primus*, ejercer una acción en daños y perjuicios contra *Tertius*, amparándose en el artículo 1166 del Código Civil dominicano?

Este punto se hizo célebre con motivo de haberse presentado ante el Tribunal civil del Sena. Tan alto

El hecho de si el acreedor está o no facultado para aceptar o repudiar un legado de su deudor, ha sido objeto de acaloradas controversias, sin que se haya llegado todavía a un acuerdo general. En nuestros mismos días se han emitido diversas opiniones con motivo de un fallo de la Corte de Grenoble en enero de 1900, por el cual se reconoció al acreedor el derecho de aceptar el legado conferido a su deudor. Tratábase de un negociante retirado y lleno de deudas que rehusaba aceptar el legado hecho por un sacerdote, su tío, basando su negativa a aceptar dicho legado, en que era protestante y no debía recibir beneficio alguno de un sacerdote católico.

Nos reservamos para mas tarde el hacer la crítica de este aspecto de la Jurisprudencia francesa sobre un punto notablemente debatido, y estudiaremos ahora la capacidad del acreedor para aceptar o repudiar un legado.

La facultad acordada por el artículo 1166 puede a su vez ejercerse por los acreedores? Este caso no es otra cosa sino la expresión general del presentado por Chavaux a propósito del embargo retentivo, y que nosotros resolveríamos afirmativamente, y de un modo contrario a Laurent y Huc.

Este último se expresa en los siguientes términos: «El género especialísimo de ejecución autorizado por el artículo 1166 constituye una *simple facultad* dentros de los actos de *pura administración*; y es desde luego inadmisible que los acreedores puedan ejercerlo».

Mr. Labbé, como nosotros, no vé obstáculo en la aplicación del artículo 1166 a otro deudor que esté en condiciones de acogerse a él.

El Art. 1446 del C.C. al expresar que los acreedores personales de la mujer no pueden pedir la separación de bienes sino en el caso de quiebra o insolvencia del marido, ha orijinado una torcida interpretación de sus términos. Entre los sistemas que aspiran al honor de ser los ciertos, señalaremos: 1º el que opina que los bienes de la mujer no son cesibles, lo que a nuestro humilde parecer es una flagrante contradicción con los términos mismos del artículo, el cual autoriza la cesión de los bienes previo consentimiento de la esposa; 2º el que afirma que los bienes no son trasmisibles, lo que impediría que los herederos de la mujer puedan pedir la separación de los bienes de esta. Este último sistema ha sido puesto en descrédito por una Jurisprudencia constante.

cultad no forma parte de la prenda común, y no puede, desde luego, ejercerse por los acreedores».

La jurisprudencia de ciertos tribunales se muestra de acuerdo con la opinión del Profesor Hue; con efecto, una decisión de la Corte de Ruan del 12 de noviembre del año 1888 la consagra para el caso de retracto de indivisión (véase Delloz, 90, 2, 324). Igualmente el tribunal civil de Periquet ha decidido «que una donación de bienes presentes y futuros, concedida por la ley al donatario en el artículo 1084 del Código Civil, constituye una prerrogativa cuyo uso se abandona a la propia discreción del legatario, y que es un derecho peculiar a la persona no sujeto a la aplicación del artículo 1166 del Código Civil».

Laurent y Lacantinerie se deciden igualmente por la negativa, por tratarse de un hecho de conciencia. ¿Que los acreedores no puedan ejercer el derecho de su deudor por tratarse de un hecho de conciencia? ¿No se desvanece éste, ante otro hecho de conciencia de mayor fuerza moral, cuál es el deber que tiene el hombre de cumplir sus compromisos? ¿Puede alardear de escrupuloso quien no ha sabido cuidar del decoro de su nombre?

Entre los autores que se deciden por la afirmativa o que reconocen al acreedor la falcultad de aceptar un legado, citaremos a Demolombe: «Todo derecho que implica una opción no está comprendido en el grupo de derechos cuyo ejercicio permite el artícu-

Como prueba de lo sutil de este punto citaremos el hecho de que ha originado tantos sistemas como autores, no obstante servirse todos ellos de unos mismos medios. Para mayor claridad de dicho tópico, objeto primordial de esta humilde tesis, distribuiremos las diversas opiniones en dos grupos: 1º—autores que incluyen en los términos del artículo 1166 la facultad de aceptar o repudiar un legado; 2º—autores que no la incluyen.

1º—Entre los autores del segundo grupo citaremos a Hipólito Huc y a Baudry Lacantinerie, quienes por distintas consideraciones de orden moral le niegan al acreedor este derecho. El primero, le retira terminantemente a los acreedores la facultad de aceptar o repudiar por su deudor una donación, un legado un retracto, etc., no porque ello implique un atributo exclusivamente peculiar a la persona, incluido por tal concepto en la excepción que el artículo 1166 del Código Civil establece en su parte final, sino porque *no supone un derecho adquirido del deudor.*

«En determinados casos jurídicos, sienta Huc, una persona puede encontrarse investida del derecho de ejercer una *opción*, por ejemplo, en materia de legado, de sucesión, de comunidad, etc.; en todos estos casos antes que el deudor hubiere manifestado una intención cualquiera el derecho de opción aparece como una simple facultad, más bien que como el ejercicio de un derecho contra un tercero. Esta fa-

CONCLUSIONES:

De todo lo expuesto anteriormente derivamos las siguientes conclusiones:

a) El artículo 1166 del Código Civil dominicano solo se refiere a los derechos comprendidos dentro de la prenda de los acreedores, esto es, a los derechos patrimoniales;

b) El testador tiene generalmente por objeto beneficiar económicamente al legatario;

c) Puede el acreedor aceptar un legado hecho a su deudor en virtud del artículo 1166 del Código Civil dominicano;

BNPHJ
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA

lo 1166 del Código Civil a los acreedores. Se puede invocar la teoría de la voluntad, no para argumentar que el derecho de opción está comprendido en el precitado artículo, sino para excluirle de la regla que establece este en su primera parte. Se puedea firmar por lo contrario que están comprendidos en esta todos los derechos que no signifiquen opción. Ahora bien, es evidente que la facultad de aceptar o repudiar un legado, es para el deudor un derecho semejante a cualquier otro derecho».

Nos sentimos inclinados a conceder a los acreedores el derecho a ejercer la acción propia de su deudor, en todos los casos en que esta no tenga una base decididamente moral, y aceptamos desde luego, la aplicación del artículo 1166 del Código Civil, contrariamente a la opinión de Huc, Laurent y otros juristas eminentes, siempre que su ejercicio conlleve aumento del patrimonio del deudor y beneficio para sus acreedores.

Es inmoral que quien no ha correspondido a la confianza inspirada oponga obstáculos a satisfacer su deuda con vanos pretextos de conciencia, tal vez invocados por considerar que no tendrá beneficio en la aceptación del legado. Además, la circunstancia de que la ley en cierto modo favorezca al acreedor, así como el fin de beneficencia con que se hace el préstamo, pueden servir de argumentos en favor de los que conceden al acreedor el derecho de aceptar o repudiar un legado hecho a su deudor.

BIBLIOTECA NACIONAL

ARTICULOS COMENTADOS.

Art. 1166 del Código Civil: «Sin embargo los acreedores pueden ejercer todos los derechos i acciones correspondientes a su deudor, con excepción de los exclusivamente peculiares a la persona».

Art. 2093 del Código Civil: «Los bienes del deudor son la prenda común de sus acreedores, distribuyéndose el precio entre ellos a prorata, a menos que existan entre los mismos causas lejítimas de preferencia».

BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA

d) Puede el acreedor repudiar un legado hecho a su deudor en virtud del mismo artículo.

Hector L. Galvan.

Santo Domingo, Diciembre 19 de 1917.

Vista:
El Presidente de la Tesis,
Prof. Jacinto B. Peynado.

Vista:
El Decano,
Prof. Apolinar Tejera.

Vista y Autorizada:
El Rector,
PROF. RAMON BAEZ.

Registrada con el No. 3 del Libro correspondiente.
El Secretario General interino,
Lic. Eduardo V. Vicioso.

Santo Domingo, 15 de Enero de 1918.

BIBLIOGRAFIA.

AUBRY Y RAU.—t. VIII, párrafo 778.

COLMET DE SANTERRE.—t. V.

PROUDHON.—t. V.

LAROMBIERE.—t. IV a propósito del Art. 1166.

HUC.—t. VII, libro III, título III.

LAURENT.—t. XVI, párrafo 383.

DEMOLOMBE.—t. XXV, pág. 54.

LACANTINERIE y L. BARD.—pág. 589.

DALLOZ.—Art. 1166 y 2093.

PANDECTAS FRANCESAS.—t. XV.

PLANIOL.—t.

LABBÉ.—Revista Crítica de Legislación, año 1856, a propósito del Art. 1166. Nº 27.

ZACARÍAS.—t. III, edición 1844—y TROPLONG.

BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA